



ALTERIDAD. Revista de Educación

ISSN: 1390-325X

jpadilla@ups.edu.ec

Universidad Politécnica Salesiana

Ecuador

Delcourt, Laurent

Movilizaciones del Sur frente a la crisis alimentaria

ALTERIDAD. Revista de Educación, vol. 4, núm. 1, enero-junio, 2009, pp. 8-26

Universidad Politécnica Salesiana

Cuenca, Ecuador

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=467746245002>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

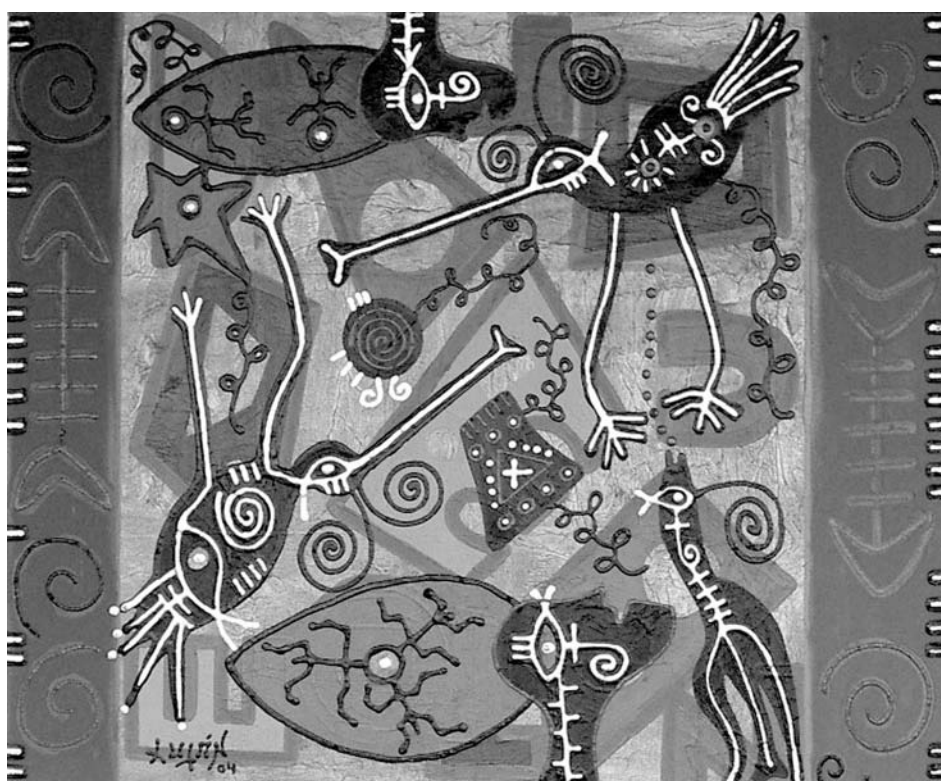
Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Movilizaciones del Sur frente a la crisis alimentaria¹

Laurent Delcourt*



Imaginería. Técnica mixta sobre lienzo

“Creemos que a esta crisis alimentaria hay que darle un nombre más exacto. Todavía no damos con ese nombre. Pero no es una crisis de alimentos, es una crisis de valores en las empresas transnacionales, en los gobiernos y en la cooperación internacional”, Sinforiano Cáceres, presi-

dente de la Federación nacional de cooperativas, Nicaragua (Envío, 2008).

Primer semestre 2008. El Sur es sacudido por una ola de manifestaciones populares violentas como consecuencia del alza espectacular de los precios de los alimentos. Ningún conti-

* Sociólogo e historiador, encargado de estudios en el CETRI (Centro tricontinental), Louvain-la-Neuve.



nente se salva. Como un reguero de pólvora los disturbios urbanos estallan sucesivamente en Guinea, Burkina Faso, Camerún, Senegal, Haití, Costa de Marfil, Filipinas, Bangladesh, Pakistán, Indonesia, Malasia... Son casi simultáneos en Marruecos, en Túnez y en Egipto. Por todas partes el fenómeno parece repetirse de manera idéntica: alza súbita de los precios, expresiones de ira popular, saqueo de almacenes o de bodegas, proclamación del estado de emergencia por parte de las autoridades, enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden que, en ciertos casos, no dudan en disparar contra la “masa”.

El saldo humano es alto: en total, centenas de heridos y decenas de muertos, principalmente en África (Camerún, Costa de Marfil, Mauritania, Somalia, etc.). En algunos países, la presión en las calles es tal que los gobiernos nacionales se encuentran directamente amenazados. Haití lo experimenta dolorosamente: al cabo de tres días de disturbios donde mueren cinco personas, una de ellas un casco azul de la Minustah (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, uno de los blancos preferidos de los manifestantes), y el intento de tomar el Palacio nacional, el gobierno de Alexis se ve forzado a dimitir. En otros lugares, el hachazo de la represión cae: los arrestos son innumerables.

Muy rápido, un viento de pánico se apodera de la comunidad internacional. Ante esta multiplicación de “motines del hambre” algunos hablan ya de la “primera crisis alimentaria global desde la segunda guerra mundial”. Otros destacan el carácter inédito de esta crisis que ahora afecta de lleno a las ciudades. Muchos temen un contagio amotinador. Con un discurso de tinte dramático, la prensa internacional se hace ampliamente eco de los eventos.

El Watan, el gran periódico argelino, predice una nueva “inflación de la pobreza” (Ali Benyahia, 13 de abril del 2008) ante la subida de los precios de los alimentos. El semanario británico *The Observer* da la alarma, advirtiendo que el “espectro de la catástrofe” estaría “azotando la tierra” (McKie, Steward, 13 de abril del 2008). Eric Le

Boucher, en *Le Monde*, anuncia el “regreso de los estómagos vacíos”, y previene: “Para centenas de millones de pobres, la alimentación supera el 75% de sus ingresos. La única alternativa que tienen es la de pasar hambre. La inflación alimentaria amenaza con anular la victoria histórica contra la pobreza y la desnutrición que el hombre estaba por conseguir.” (13 de abril del 2008).

Al parecer, la amplitud y la gravedad de la crisis cogieron desprevenidas a las instituciones internacionales, a pesar de las repetidas advertencias hechas por la FAO desde varios meses², y éstas suenan la alarma y dan los primeros diagnósticos. El tono es alarmista. El cuadro es pesimista: 100 millones de personas, señalan las Naciones Unidas, podrían caer en la pobreza por el alza de los precios de los productos alimenticios básicos si no se toma ninguna medida enérgica. Acumulando niveles elevados de subalimentación crónica, un alto crecimiento demográfico y una gran dependencia de las importaciones energéticas y alimentarias, unos cuarenta países son considerados particularmente vulnerables. Los países emergentes, advierte además la ONU, también podrían tener disturbios, o por lo menos fuertes tensiones sociales si el alza de los precios continúa.

Y las diferentes agencias Onusianas multiplican los llamados a la acción y a los planes de urgencia. Al mismo tiempo, la FAO convoca una cumbre extraordinaria en Roma (junio del 2008) y Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, para quien esta crisis es capaz de reducir a la nada cerca de siete años de esfuerzo en la lucha contra la pobreza, aboga por la ejecución de un “*New Deal* alimentario” en el cual se dé una nueva prioridad a las inversiones agrícolas. Por su lado, las grandes potencias –Estados Unidos y Europa a la cabeza– se comprometen en aumentar su ayuda alimentaria y su apoyo al desarrollo agrícola. La inquietud es palpable a nivel de los dirigentes mundiales, algunos estiman que en lo sucesivo la inseguridad alimentaria constituye una amenaza aún mayor que el terrorismo para la estabilidad internacional.



En el Sur, varios son los Estados que no esperaron para actuar. Temiendo la ira de las calles, se tomaron medidas de urgencia para luchar contra la espiral inflacionista: bloqueo de los precios de los alimentos, uso de las reservas estratégicas, supresión temporal de los impuestos sobre las importaciones, aumento de los subsidios alimentarios, alza selectiva de salarios, limitación, hasta bloqueo, de las exportaciones, etc. En Egipto se pide ayuda al ejército para poder hornear el pan en las panaderías del Estado. En Filipinas, se lo ve distribuyendo sacos de arroz en los suburbios, y, como en Tailandia, primer exportador mundial de arroz, vigilando arma en mano los campos y las bodegas. El gobierno filipino va más allá aún al ampliar la pena de muerte para los individuos que almacenan arroz en secreto con el fin manipular su precio (Weaver, 2008).

Más allá de los “motines del hambre”

Ya que el humo de los recientes disturbios se ha disipado, nos parece útil, en esta edición 2009 de “Estado de las resistencias en el Sur”, rever estos acontecimientos con una mirada a la vez objetiva, crítica y lúcida sobre la “crisis”. Sobre sus motivos y su significado por supuesto. Pero también sobre la diversidad de las reacciones causadas, las tensiones abiertas o latentes engendradas por el alza de los precios, las respuestas dadas por los gobiernos nacionales, y finalmente su actitud frente a las movilizaciones populares.

Muy rápido, un viento de pánico se apodera de la comunidad internacional. Ante esta multiplicación de “motines del hambre” algunos hablan ya de la “primera crisis alimentaria global desde la segunda guerra mundial”

Antes de nada, se requiere hacer un análisis, que se refiera a la vez a consideraciones teóricas y a una preocupación de representatividad, puesto que no puede ser exhaustivo. El término “motín del hambre” es un término engañoso, con una connotación muy fuerte. Sugiere una reacción violenta, espontánea, emotiva, imprevisible, irracional e incontrolable de un conglomerado de individuos sin vínculo aparente, sino sólo su pertenencia a las clases más desfavorecidas de la población, sin más proyecto que la satisfacción de una necesidad inmediata y sin más motivos que una profunda frustración. Al encontrarse en una situación límite, estos “estómagos vacíos” no tendrían más alternativa que el recurso a la violencia a falta de otros canales de expresión.

Un análisis más detallado y contextualizado de los últimos episodios de los disturbios del Sur invita sin embargo a matizar este concepto. En efecto, los disturbios no siempre tienen el carácter espontáneo e irracional que se les quisiera dar. Al observarlos más de cerca, éstos a menudo esconden, entre ruido y furor, formas iniciales de movilizaciones netamente más organizadas y estructuradas, duplicándolas o desbordándolas. Esto explica que el límite entre disturbios y formas de acción colectivas más convencionales sea impreciso.

La comprensión de los disturbios no puede reducirse a un solo eje de la confrontación. En realidad, como lo recalca Didier Le Scout refiriéndose al Magreb, los disturbios contienen una pluralidad de significados (1999). No son una muestra de una cultura específica, y tampoco pueden ser considerados bajo el ángulo de una causalidad única, en este caso el “hambre”. Evitemos en efecto caer en el error de un análisis determinista de la “crisis” que presupone un vínculo mecánico entre una situación de carencia y su concreción en revuelta más o menos abierta.

La expresión “motín del hambre” puede ser engañosa. Por una parte porque, en los medios más pobres, estas formas de protesta colectiva constituyen mucho más la excepción que la regla. Por otra, porque las metas de estas explo-



siones urbanas son generalmente múltiples, sus participantes no siempre vienen de la parte baja de la escala social y los motivos que conducen a la acción reflejan una realidad mucho más amplia que la sola satisfacción inmediata de una necesidad.

A lo largo de estos episodios de disturbios, a menudo se asocian a la emoción o a la frustración auténticas reivindicaciones sociales y políticas cuyo alcance y significado van más allá de las motivaciones más aparentes. Reflejos de las tensiones que atraviesan las sociedades del Sur, estos “motines” no deben ser tomados e interpretados como simples accidentes coyunturales, aislables en el tiempo y en el espacio, sino considerados dentro de un *continuum* o una genealogía de luchas y de resistencias afianzadas en contextos sociales, políticos, culturales específicos y variados.

Finalmente, para completar el cuadro, tenemos que hacer justicia a los demás tipos de reacciones populares causadas por el alza súbita de los precios. Y para ello, ampliar la perspectiva. Es decir, pasar de una geografía del disturbio a una geografía de la protesta, esto a fin de poner en evidencia la gran diversidad de las resistencias, de los métodos de acción colectiva y de los lugares de expresión de la insatisfacción en el Sur.

Si bien los medios de comunicación internacionales se interesaron esencialmente en los disturbios urbanos por el hecho de su simultaneidad y de su carácter espectacular, obviaron ampliamente los otros tipos de movilizaciones, sobre todo en el medio rural y fuera de este famoso “cinturón de pobreza” definido por la FAO. De hecho más convencionales, sin duda menos ruidosas, estas luchas son igualmente significativas para comprender los múltiples desafíos vinculados con el tema alimentario, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Establecer un panorama de estas movilizaciones colectivas en su diversidad y su complejidad, ubicarlas en las realidades nacionales, comprenderlas con respecto a las tendencias mundiales, tal es la apuesta de esta edición 2009 de *Estado de las resistencias en el Sur*.

Raíces de la crisis

En caso de un concurso de circunstancias, de un efecto de coyuntura, de una combinación no propicia e inopinada de factores agravantes, atribuyendo a cada cual un papel más o menos determinante según la apreciación de la crisis, éstas son las explicaciones más evocadas por los expertos y los medios de comunicación para dar cuenta de la actual problemática alimentaria: alza de los costos de la energía; cambio climático; explosión de la demanda debido a las nuevas costumbres en los países emergentes; reducción de la oferta por las malas cosechas en algunos grandes países exportadores (Australia, Brasil, Ucrania, etc.); agotamiento de stocks internacionales, en los niveles más bajos desde la Segunda Guerra Mundial; anticipación en los precios y especulación de los productos alimenticios, convertidos en valores refugios en un clima económico y financiero moroso; voluntad de ciertos países exportadores de reservar su producción para el mercado interno; caída del dólar; y sobre todo, carrera para la elaboración de combustibles biológicos, presentados en otros tiempos como recetas milagrosas contra el cambio climático³.

En verdad estos factores intervinieron en diferentes niveles con relación al alza súbita de los precios de los alimentos, pero, como en el caso de los factores endógenos (sequía, guerra civil en Kenia, bloqueo de los territorios palestinos, etc.) no son suficientes para explicar la crisis alimentaria.

No nos dejemos engañar por el carácter espectacular del alza de los precios que alimenta los miedos neomalthusianos de una penuria generalizada de bienes alimenticios frente a una demografía galopante. Estos últimos cincuenta años, la producción alimentaria y agrícola mundial en realidad aumentó con la misma rapidez, e incluso más rápido que el crecimiento demográfico⁴. En el caso actual, aunque desde hace varios años se hayan registrado niveles récord de producción y se logrará hacerlo de nuevo en el futuro, una pequeñez habrá bastado —disminu-





Imaginería. Detalle

ción relativamente escasa de la producción en algunos grandes países exportadores conjugada a fenómenos de anticipación— para provocar un alza desproporcionada de precios en los mercados internacionales.

Pero aún así, esta subida no tiene nada de excepcional, sólo tal vez su rapidez, más aún porque sucede después de un largo período de baja tendencial de los precios agrícolas y alimenticios: “Esta situación, explica Sylvie Brunel, nos recuerda los precedentes de 1973-1974 y de 1996, que también son periodos de tensiones en los precios.” Y añade la economista: “Lo nuevo es que ésta pone en evidencia la extrema vulnerabilidad y la dependencia de muchos países en vías de desarrollo hacia sus importaciones alimentarias” (2008).

Es obvio que si la coyuntura tuvo consecuencias tan desastrosas en el Sur, es porque el terreno se prestaba para ello. La memoria mediática es corta. Ya, en los años 1980 – 1990, los países en desarrollo fueron la escena de numerosos disturbios urbanos... casi unos cincuenta. Más recientemente, Níger (2005), Bangladesh (2006), Mauritania, Guinea o también México y Marruecos (2007) tuvieron revueltas similares, aunque estos dos últimos países no consten en la lista de países considerados “vulnerables” de la FAO.

Otra manera de preguntar es: ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo ciertos países, en otros tiempos autosuficientes, cayeron en una tal dependencia? Si bien la metáfora naturalista utilizada por el Comisario europeo para el desarrollo

Louis Michel, quien habla de un “tsunami económico y humanitario” para calificar los recientes acontecimientos, expresa realmente la gravedad de la situación, no impide que sea falaz. Ya que esta “crisis alimentaria” era perfectamente previsible. Sus raíces son profundas. Y su amplitud en los países del Sur es más bien la consecuencia de opciones políticas y económicas que fueron tomadas, reforzando una vulnerabilidad que se volvió poco a poco estructural, y no de un efecto coyuntural o un simple imprevisto. Crisis no tanto de escasez, sino de acceso a los alimentos para los países y los grupos más pobres, cuyo origen se debe principalmente a la transformación de los sectores agrícolas nacionales a lo largo de las últimas décadas.

Par comprender bien esta evolución es necesario echar una breve mirada hacia atrás. A principios de 1980 estalla la crisis de la deuda. A fin de disminuir un presupuesto bastante maltratado por el “servicio” de ésta última, las instituciones financieras internacionales obligan a la mayoría de los Estados del Sur a ajustar su economía. Las recetas son conocidas: austeridad presupuestaria, privatización de los servicios públicos, recortes netos en los gastos sociales, apertura a los intercambios y a los capitales extranjeros, etc.

Considerado costoso y poco productivo, el sector agrícola también es objeto de reformas de fondo. Se invita a los países en desarrollo a desregular sus mercados agrícolas, a abrir totalmente sus fronteras para las importaciones (sobre todo alimentarias) y a dismantelar sus políticas de

asistencia para este sector, incluso las instituciones públicas encargadas de monitorear a los productores. Paralelamente, se les pide enfocarse en la producción y la exportación de productos con mayor valor añadido (fuentes de divisas en los mercados internacionales) y para los cuales disponen de ventajas comparativas innegables (mano de obra abundante y barata, condiciones de explotación favorables, facilidades de acceso a los recursos, etc.), perjudicando a los cultivos de plantas comestibles.

Para los autores de estas políticas neoliberales, la seguridad alimentaria realmente no estaba en peligro, en la medida en que los mercados internacionales se encargarían, en teoría, de abastecer a los mercados locales –particularmente urbanos– de productos alimenticios a bajos precios, en particular los provenientes de las agriculturas del Norte (Estados Unidos y Europa principalmente) con situaciones de sobreproducción, y mucho más competitivas puesto que se benefician de una política de ayuda pública generosa (primero subsidios para la exportación, y luego éstos son remplazados por ayudas directas a sus productores).

Así, John Block, Secretario de Estado de Agricultura en el gobierno de Ronald Reagan, declaraba en los años 1980: “La idea de que los países en desarrollo deberían alimentarse ellos mismos es un anacronismo de otros tiempos. Podrían asegurar mucho mejor su seguridad alimentaria contando con los productos estadounidenses, disponibles a menor costo” (citado por Bello, 2008).

En otras palabras, todo el mundo debía sacar provecho de la apertura y de la desregulación de los mercados agrícolas: el Norte lograría vender sus excedentes, mientras que los países del Sur mejorarían su situación económica sin tener que preocuparse por su seguridad alimentaria, puesto que a partir de ese momento ésta iba a ser asegurada por los mercados. Dentro de este mismo contexto serán firmados los diversos acuerdos de libre comercio regionales, bilaterales y birregionales, así como los acuerdos de Marra-

kech (1995) que establecerán, con la creación de la OMC, un marco global para la liberación de los intercambios agrícolas.

Esta “actitud pasiva” tendrá consecuencias devastadoras para los países del Sur. Llevando los precios a un nivel artificialmente bajo, sin relación alguna con los costos de producción, la competencia internacional alterará profundamente las economías rurales locales y acabará con los pequeños campesinos, que ya no podrán obtener un ingreso suficiente por su actividad, al punto de afectar la seguridad alimentaria de muchos países.

El caso de Haití es emblemático. A fines de los años 1980, en el marco del plan Caribe minuciosamente elaborado por las instituciones internacionales y la administración Reagan, el país abandona casi totalmente su agricultura de subsistencia cuyos costos de producción eran considerados en esa época como “prohibitivos”. Conminado a abrir totalmente sus fronteras para integrarse mejor en la economía mundial, el gobierno haitiano suprime en sólo algunos años los derechos de aduana de varios productos alimenticios (entre otros los cereales y las leguminosas), para concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de cultivos más fácilmente exportables hacia Estados Unidos o Europa (árboles frutales principalmente). En cuanto a las fábricas y talleres de ensamblaje que supuestamente iban a implantarse en el país – promesa de los autores del plan – atraídos por las “condiciones favorables”, éstos se encargarían de absorber la mano de obra rural excedentaria.

Las consecuencias de esta política rápidamente resultaron ser catastróficas:

De la noche a la mañana, los campesinos haitianos, peso pluma de la agricultura mundial, tuvieron que boxear en el mismo ring que los pesos pesados americanos, cuya agricultura es muy subvencionada. Las importaciones se dispararon y los precios cayeron tan rápido como los ingresos de los campesinos. El resultado es que, mientras en el pasado la agricultura haitiana satisfacía más o menos las necesidades de la población, ahora el país importa cerca del 60% de sus alimentos. No es una sorpresa, en esas condiciones,



que a la menor evolución de los cursos en los mercados mundiales, los “motines del hambre” se desencadenen como un fuego de paja (Husson, 2008).

Incapaces de competir con importaciones baratas que tenían costos de producción muy inferiores a los suyos, los campesinos haitianos, pero también filipinos, egipcios, nigerianos, indios, senegaleses, mexicanos, etc. vieron en pocos años cómo su ingreso se fundía como nieve al sol. Y se encontraron bloqueados en una espiral de endeudamiento y de empobrecimiento. Presionados por los mercados internacionales, menos canalizados y ayudados que en el pasado, muchos no tuvieron más alternativa que vender su fuerza de trabajo a los grandes terratenientes y a las empresas agroindustriales que supieron aprovechar plenamente la apertura y la liberalización de los intercambios agrícolas (acceso a nuevos mercados, disponibilidad de mano de obra, posibilidad de concentrar nuevas tierras y comprar las mejores por una bicoca a los campesinos empobrecidos, etc.) o de migrar hacia las aglomeraciones urbanas agrandando los suburbios que al campo se le hacía cada vez más difícil alimentar.

Asimismo, la apertura del mercado mexicano al maíz importado de Estados Unidos habría obligado a cerca de 1,3 millones de campesinos a dejar el campo entre 1994, fecha de la firma del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), y 2003. El país, en otros tiempos autosuficiente, importa desde entonces cerca del 30% del maíz necesario para su consumo desde Estados Unidos. En este caso, la decisión de Estados Unidos de producir masivamente combustibles biológicos a base de maíz, junto con las prácticas especulativas de las principales empresas importadoras en situación de casi monopolio, provocó en pocos meses un aumento de cerca del 60% del precio de la tortilla, causa de los disturbios del 2007.

La entrada de Filipinas a la OMC tuvo consecuencias igualmente catastróficas en el campesinado local. La supresión de cuotas en las importaciones de arroz y la decisión del gobierno de Aquino de reducir drásticamente las ayu-

das a los productores para recortar el presupuesto nacional, produjeron una disminución de 400.000 personas en la población activa campesina entre 1994 y 2001. Esto sucedía mientras que el gobierno prometía que las eventuales pérdidas de empleo se compensarían mucho más con la creación de 500.000 puestos suplementarios en el campo, gracias al surgimiento de una industria agro-exportadora basada en producciones con “mayor valor agregado” (coliflor, brócoli, espárrago, etc.). Exportador neto de arroz bajo el régimen autoritario de Marcos (1965-1986), Filipinas importa ahora grandes cantidades de Tailandia para el consumo doméstico (Bello, 2008). Si sobreviene, en esas condiciones, una brusca alza de los cursos internacionales del arroz, las poblaciones de las ciudades, engrosadas por la llegada masiva de los campesinos empobrecidos, serán las primeras en sufrir las consecuencias.

Dicho esto, como lo recalca con razón Sylvie Brunel, “acusar a los países del Norte y a las instituciones financieras internacionales de haber querido hacer padecer hambre a los países en desarrollo, [...], refleja más el oportunismo de las circunstancias que la realidad” (2008). Los países industrializados y las instituciones internacionales no son los únicos responsables de la erosión del paisaje agrícola en los países del Sur. Interesados en maximizar sus intereses económicos y políticos a corto plazo, “los países en desarrollo, mucho antes de la crisis de la deuda, fueron los primeros en sacrificar a sus campesinos en el altar de la urbanización, de la industrialización y de la paz social” (*ibíd.*).

Desde los años 1960 en efecto, la mayoría de los gobiernos del Sur descuidaron intencionalmente el desarrollo y el fortalecimiento de la agricultura familiar y de subsistencia, considerada poco importante desde un punto de vista estratégico, para concentrar sus inversiones y sus esfuerzos en programas de industrialización a marcha forzada. Con el riesgo de afectar a un sector que representaba en ese entonces la gran mayoría de la población activa y de acrecentar



su dependencia alimentaria, esta modernización desde arriba se apoyó en la importación masiva de productos alimenticios a bajo precio⁵, como medio, en una lógica clientelista, de comprar la paz social en la ciudad y contener los salarios para facilitar el proceso de industrialización.

La importación de productos alimenticios tenía además la ventaja de producir impuestos providenciales para esos gobiernos pobretones y en busca de legitimidad. En muchos casos (Brasil, Argentina, Indonesia, Tailandia, Egipto, Costa de Marfil, Kenia, etc.), este proceso estuvo también acompañado por una política orientada hacia el desarrollo de monocultivos de exportación heredados de la época colonial, a costa de los cultivos de subsistencia (Friedmann, 2008; Mazoyer y Roudart, 2002). Más tarde, durante la fase neoliberal, varios fueron los gobiernos que además tomaron ellos mismos la iniciativa de desregular su mercado agrícola, sin esperar las directivas de las instituciones internacionales. No ver las responsabilidades locales en la deterioración de la situación, es no poder comprender el significado y el “alcance” reales de las movilizaciones sociales y populares del Sur.

Movilizaciones: actores, formas, desafíos...

Si el origen de la “crisis alimentaria” debe principalmente buscarse en la restructuración del paisaje agrícola y en la erosión de la agricultura familiar a lo largo de los veinte, treinta, incluso cincuenta últimos años, es en cambio en las ciudades que se sintieron los efectos más inmediatos del alza de los precios. Ahí también es donde las reacciones populares frente al alza desmesurada de los precios fueron más enérgicas. No sin razón. A medida en que se produjo el triple proceso de éxodo rural, urbanización y extraversion económica, las ciudades del Sur acabaron dependiendo casi exclusivamente de las importaciones de los productos alimenticios para

Más que simples reacciones defensivas, estas marchas cristalizaron también la aspiración a cambios políticos de fondo.

alimentar una población cada vez más numerosa, y ahora a merced de la mínima oscilación de los cursos internacionales.

Amplificadas por la caja de resonancia mediática, las protestas urbanas no deben, sin embargo, hacer olvidar que la problemática alimentaria afecta más al campo que, se debe recalcar, representa la mayor parte de la población en situación de extrema pobreza⁶. Pero enfoquémonos primero en las protestas urbanas.

Protestas urbanas

Digámoslo desde un principio, es casi imposible entender de un solo golpe las numerosas expresiones de descontento en medio urbano ante el alza de los precios. Ya que, en este asunto, la diversidad domina: diversidad de los lugares, de las situaciones y de los contextos de movilización, diversidad de las formas y de los repertorios de acción, diversidad de los participantes y de los actores presentes, diversidad de los motivos, etc. Qué tienen en común, en efecto, los disturbios de Puerto Príncipe, los estallidos esporádicos de violencia en Abiyán o en Karachi; los enfrentamientos mortales entre jóvenes desempleados y fuerzas del orden en las pequeñas ciudades de Sidi Ifni en Túnez y Gafsa en Marruecos; la prolongada huelga de los camioneros en Managua para obtener una disminución de los precios de la gasolina; la de los obreros textiles en Bangladesh y en Egipto, o las generales e intersectoriales organizadas en El Salvador, en Guatemala, en India o en África del Sur, sino su concomitancia.



A veces reactivas, otras veces reivindicativas; a veces espontáneas, otras veces estructuradas; a veces dispersas, otras veces canalizadas; agitaciones de superficie o mar de fondo, estas protestas urbanas encajan difícilmente en un esquema interpretativo único. Primeramente porque su naturaleza y su alcance dependen mucho –sin por ello reducirse totalmente a esto– de los contextos nacionales en los cuales se encuentran, caracterizadas por lógicas conflictuales propias. Luego, porque los motivos de su aparición las alejan a menudo de la problemática alimentaria en sí.

En este contexto de alza de precios, varias categorías sociales en efecto se movilizaron por temas variados y causas diversas. Prolongando a menudo luchas mucho más viejas, estas movilizaciones reflejan sobre todo fuertes tensiones (sociales, económicas, políticas, culturales, étnicas, etc.) que atraviesan los universos urbanos extremadamente fragmentados y cada vez más desiguales.

Obviamente, la coyuntura actual no es necesariamente percibida como un fenómeno exclusivo o excepcional en las ciudades del Sur. A lo sumo aumenta la presión sobre las poblaciones urbanas que viven un proceso de informalización acelerada y una deterioración creciente de sus condiciones de vida, sobre todo después del ajuste sectorial de las ciudades en los años 1980 y 1990, que ya fue causa de “motines del hambre” (Delcourt, 2007).

Como lo señala en este libro Michel Luntumbue refiriéndose a la República democrática del Congo, con un comentario que se podría utilizar para varios países y ciudades del Sur, esta crisis “se inscribe en el contexto de una crisis anterior amoldándose a ella. Los efectos prolongados de la primera crisis ocultan la segunda y la vuelven difícil de entender”. Esta crisis, usando las palabras del autor, solo se inserta en otra, mucho más profunda, remplazándola.

Una tendencia puede, sin embargo, desprenderse de esta constelación de movilizaciones urbanas, y merece ser tomada en cuenta: el sur-

gimimiento y la multiplicación de “coaliciones contra la vida cara” en África negra, en Egipto y en el Magreb, generalmente fuera de los habituales canales de expresión y de los movimientos políticos tradicionales. Heteróclitas en su composición –hay asociaciones de consumidores, estudiantes, desempleados, organizaciones confesionales y de pequeños comerciantes, ONG, grupos de defensa de los derechos humanos, representantes de las comunidades de base, partidos de oposición y sindicatos–, estas “coaliciones” revelan la aparición en la escena pública de un nuevo actor colectivo cuya única alternativa es utilizar la calle como lugar de expresión. Activas ciertas veces a nivel local alrededor de motivos específicos, otras veces a escala nacional, estas coaliciones son prueba también, más allá de las reivindicaciones materiales inmediatas, del descontento creciente de amplios sectores de la población con los sistemas políticos nacionales.

En efecto, en varios casos (Senegal, Costa de Marfil, Guinea, Níger, Camerún, Burkina Faso, etc.) las marchas contra la vida cara organizadas por iniciativa de estas coaliciones, en vínculo estrecho con las fuerzas de oposición más tradicionales (sindicatos, partidos políticos, etc.) se volvieron verdaderas manifestaciones antigubernamentales, donde se denunciaban indistintamente la incuria, la corrupción, la falta de gobernabilidad, la ausencia de diálogo, la falta de libertad individual y colectiva, el autoritarismo o también la indiferencia de las autoridades públicas, consideradas como ampliamente responsables de la situación.

Más que simples reacciones defensivas, estas marchas cristalizaron también la aspiración a cambios políticos de fondo⁷. Seguramente no es una casualidad si la asociación estrecha entre reivindicaciones económicas y políticas era todavía más aparente ahí donde las riendas del poder habían sido confiscadas desde hace varios años.

Ante estas movilizaciones, los gobiernos quisieron enmendarse invocando factores externos independientes de su voluntad (alza internacional de los precios, catástrofes naturales, injus-



ticia del sistema económico internacional, etc.). Sin embargo la calle apuntaba directamente a ellos mismos (Harsch, 2008). Lo que explica además la rapidez y la brutalidad de la respuesta gubernamental y los enfrentamientos violentos que subsiguieron. Las experiencias nigeriana y guineana estaban sin duda presentes en la memoria. Coaliciones similares lograron, respectivamente en el 2005 y el 2007, conseguir cambios políticos significativos (Estados de las resistencias en el Sur, 2007).

Movilizaciones de campesinos

Sin embargo, esta crisis alimentaria también fue buena para algunos: las empresas agro-exportadoras y la agroindustria sacaron plenamente provecho del alza de los cursos. La coyuntura de los precios altos, desde principios de los años 2000, les permitió no solamente acumular beneficios sustanciales, sino también fortalecer su posición económica. No sucedió lo mismo con las pequeñas explotaciones familiares para las cuales los beneficios potenciales de la coyuntura se anularon debido al alza desmesurada de los costos de producción (alza de los precios del combustible, de la tierra, del arrendamiento de las fincas, de los insumos agrícolas como las semillas, etc.), de los transportes, y a las prácticas abusivas de los negociantes en situación de casi monopolio en zonas apartadas o también debido a una situación dramática de endeudamiento.

Más allá de los efectos coyunturales, recordemos una vez más la doble tendencia histórica, generalizable en los tres continentes (África, América Latina, Asia), que empobreció profundamente y desarticuló las sociedades campesinas: la disminución tendencial de los ingresos agrícolas, agravada por la apertura de los mercados, y el fortalecimiento concomitante de un modelo productivista enfocado a los monocultivos de exportación y a los grandes proyectos industriales y de infraestructura que aumentan la presión sobre la tierra y los recursos naturales (agua, bosques, etc.). Es en contra de esta doble



Reminiscencias. Detalle

tendencia deletérea para el mundo del pequeño y mediano campesinado que los movimientos sociales rurales, campesinos e indígenas se movilizan desde hace varios años, utilizando una gama de acciones ya sea defensiva, ya sea ofensiva, ya sea reivindicativa.

En los países emergentes, los proyectos de modernización económica (concesiones mineras y petroleras, construcción de presas, creación de



zonas francas, etc.) y sus corolarios (expulsión, espoliación, etc.) son la causa de una multiplicación de resistencias en el mundo rural, unas espontáneas, otras enmarcadas por organizaciones asentadas a nivel local o nacional. En India, en China, en Indonesia o en Filipinas por ejemplo, las zonas francas o zonas económicas especiales, creadas por iniciativa de los gobiernos para atraer inversiones extranjeras e impulsar la expansión económica, son actualmente el teatro de una serie de conflictos entre las poblaciones rurales (indígenas y campesinas) por una parte, obligadas a ceder su tierra a un precio irrisorio o a cambio de vagas promesas de reinstalación, y las autoridades públicas y los grandes grupos privados⁸ por otra.

Este tipo de conflicto se intensifica igualmente en América Latina, donde la lucha contra el modelo agrícola neoliberal y sus avatares tomó en varios países (México, Paraguay, Brasil, etc.) una nueva fuerza en el contexto de crisis. Así, las organizaciones campesinas brasileñas, asociadas en esa ocasión a las principales coordinaciones urbanas, lanzaron en junio del 2008 una serie de movilizaciones en aproximadamente trece Estados. Luchando contra proyectos de infraestructura (puertos, centrales hidroeléctricas, etc.), supermercados, multinacionales agroalimentarias, grandes explotaciones agrícolas (de caña de azúcar u otras), etc., incluían entre otros repertorios de acción, marchas, bloqueos de carreteras o también invasiones de tierra.

Con este conjunto coordinado de acciones, los movimientos y organizaciones movilizadas (MST, MAB, CPT, etc.⁹) trataban de denun-

ciar la orientación de las políticas agrícolas del gobierno de Lula (política de apoyo a la agroindustria y a los sectores agro-exportadores, promoción de los transgénicos y de los combustibles biológicos, etc.), de reclamar una reforma agraria efectiva, así como programas de apoyo a la agricultura familiar y de subsistencia. Políticas públicas de apoyo a la pequeña agricultura familiar que son reivindicadas igualmente por la mayoría de las coaliciones campesinas africanas. A semejanza de sus homólogas asiáticas y latinoamericanas, tampoco dejan de denunciar el abandono y la falta de inversión del Estado en este sector, la política de liberalización y las subvenciones que reducen dramáticamente los ingresos. Signo de los tiempos, en lo más fuerte de la crisis, estas coaliciones crearon en Addis-Abeba una plataforma panafricana común para defender los intereses de las explotaciones familiares agrícolas y de los productores¹⁰.

La “crisis” finalmente fue la oportunidad para las organizaciones campesinas de desarrollar en la opinión pública el tema de la “soberanía alimentaria”, concepto movilizador clave de la red internacional Vía Campesina. Concebida como solución global para la crisis actual y para las crisis venideras, la soberanía alimentaria defiende exactamente lo contrario a las teorías fundadas en las ventajas comparativas. Considerada como un derecho internacional, ésta representa la posibilidad para un país o un grupo de Estados de definir democráticamente y de manera autónoma las políticas mejor adaptadas a las necesidades de sus poblaciones.

A la noción de “seguridad alimentaria”, que corresponde a la cantidad de alimentos producidos en el plano nacional y a su disponibilidad, añade una dimensión social y medioambiental: mejor repartición de la tierra, si es necesario por medio de una reforma agraria, protección y fortalecimiento de las explotaciones familiares y de subsistencia, preservación de los entornos, reflexión sobre el tipo de producción y la manera como se producen los alimentos, privile-

La “crisis” fue la oportunidad para las organizaciones campesinas de desarrollar en la opinión pública el tema de la “soberanía alimentaria”.



giando principalmente la agricultura orgánica y la utilización de semillas locales, en oposición a los transgénicos.

Respuestas gubernamentales a la crisis

Las reacciones de las autoridades públicas ante la crisis deben ser analizadas según la naturaleza de las relaciones entre Estados y sociedades civiles. Por una parte, porque el tipo de respuestas concretas generalmente depende de la capacidad que tiene la sociedad civil de influir en las decisiones públicas. Por otra parte, porque las respuestas gubernamentales se inscriben generalmente dentro de estrategias políticas que buscan canalizar o a anular las razones del descontento popular.

Relatando el alza de los precios alimentarios y los “motines del hambre” que se produjeron por su causa en Marruecos, Yemen, Uzbekistán, Mauritania, Guinea y Senegal, el representante de un gran organismo internacional señalaba durante el Foro económico de Davos en enero del 2008: “Estos fenómenos preocupan a los gobiernos mucho más que el aumento del precio de la gasolina” (Lemaître, 9 de febrero del 2008). Mucho más que el impacto económico directo del alza de los precios de la energía, muchos temían en efecto los conflictos sociales y los riesgos políticos asociados que podían resultar del alza extrema de los precios alimentarios, en particular en los países donde los gobiernos se caracterizan por un déficit de legitimidad.

En términos generales, es esta aprensión, mucho más que una verdadera voluntad de remediar la situación de las poblaciones directamente más afectadas, que llevó a las autoridades a reaccionar inmediatamente, adoptando con apremio un conjunto de medidas para evitar que el descontento creciente de la población se convirtiera en manifestaciones de masa, políticamente peligrosas.

En Asia, los gobiernos, en su mayoría, anticiparon los acontecimientos. Atentos a los primeros signos de insatisfacción, Tailandia, Vietnam, India, o también China optaron desde el principio por una estrategia de repliegue sobre sí mismo, ya sea restringiendo los contingentes exportados, ya sea aumentando los impuestos sobre las exportaciones, para asegurar el abastecimiento de los mercados internos. En Filipinas, para calmar las calles ya ampliamente movilizadas, las autoridades procedieron a distribuir masivamente arroz en los barrios populares.

Ahí, como en otros países asiáticos que se volvieron importadores netos, una política de estabilización y de control de precios alimentarios fue lanzada: supresión temporal de los impuestos sobre las importaciones, utilización de los stocks estratégicos, adquisiciones costosas de productos en los mercados internacionales, imposición de precios máximos para la venta hasta en los supermercados, etc. Estas iniciativas parecen haber alcanzado en parte su objetivo. Con excepción de algunos países (Filipinas, Malasia, Bangladesh, Indonesia), donde las movilizaciones fueron de todas maneras rápidamente circunscritas, Asia no fue realmente el teatro de una ola masiva de protestas populares directamente vinculadas con el alza súbita de los precios.

Tomados por sorpresa por los acontecimientos y —es cierto— menos armados para enfrentar la crisis, los gobiernos africanos, con raras excepciones (Etiopía, por ejemplo), actuaron mucho menos al principio. Frente a las reivindicaciones de la calle, prefirieron mayoritariamente la opción represiva. En los lugares donde las sociedades civiles son más débiles y menos organizadas, las pocas tentativas de movilizaciones sobre el tema alimentario fueron directamente cortadas de raíz. En otras partes, el Estado no dudó en desplegar todo su poder represivo, iniciando así un nuevo ciclo de violencia-represión.

Frente a la determinación de los protestantes y conscientes de los riesgos políticos a los que estaban expuestos, varios gobiernos final-



mente decidieron abrir el diálogo, principalmente con las organizaciones de la sociedad civil “oficial”, y adoptar algunas medidas de urgencia especialmente dirigidas a las poblaciones urbanas (eliminación de impuestos en los productos de primera necesidad, alza sectorial de salarios, en particular los de los funcionarios, indemnizaciones para los jóvenes graduados, etc.), a veces con razones puramente simbólicas, como en Senegal, donde se tomó la decisión de limitar el salario de los parlamentarios.

En un puñado de países (Nigeria, República democrática del Congo, Senegal) también se anunciaron con energía y rapidez ambiciosos planes de desarrollo agrícola para garantizar en el futuro una mejor seguridad alimentaria, incluso, como en Burkina Faso, la ejecución de una verdadera política social contra la vida cara. Sin embargo, surge la pregunta sobre los medios de una tal ambición, puesto que la vulnerabilidad de los países africanos a los choques externos es muy grande y sus capacidades presupuestarias son débiles.

En los países del Magreb y en Egipto, los gobiernos actuaron por su parte a varios niveles, usando alternativamente la represión, la apertura y las medidas de apaciguamiento. Luego de haber amenazado con reprimir cualquier movilización, las autoridades tunicinas, marroquíes o también egipcias, temiendo un contagio de protestas, maniobraron con mucho tino, tratando de adaptar sus repuestas en función del giro que tomaban los acontecimientos.

En Egipto por ejemplo, donde la huelga sectorial y localizada de los obreros textiles de la ciudad de Mahalla se transformó poco a poco en huelga general contra la vida cara, a la que se aliaron amplios sectores de la clase media sobre todo a través del llamado del movimiento Kifaya. Ante esta unión inesperada, el gobierno que en un principio mostró una rígida firmeza ante las reivindicaciones obreras, terminó por ceder y decidió aumentar los salarios de los obreros en un 50%, y los de la función pública en un 30%. Una concesión inhabitual, destinada principalmente a preservar, tras una aparente apertura, el statu quo social y político.

Como lo explica Sarah Ben Nefissa en este libro, “estas decisiones son el reflejo de la nueva actitud de los poderes públicos egipcios ante las movilizaciones de tipo social: una voluntad de “apaciguar la situación” tratando de responder de manera parcial a los reclamos y procurando vigilar cualquier politización de estas acciones colectivas y cualquier unión posible entre los activistas sociales y los activistas políticos”. Así como en Marruecos o en Túnez, las autoridades egipcias también tomaron medidas temporales para reforzar el acceso a los alimentos: aumento de los cupos de harina subvencionada, multiplicación de la cantidad de puntos de distribución de pan en las grandes ciudades, incremento de la producción de las panaderías del Estado, ampliación de la categoría de los “derechohabientes”, etc.



Omnipresencia. Detalle

El caso de América Latina también merece una atención especial. Con notable excepción de Haití y de México, la mayoría de los países latinoamericanos no tuvieron movilizaciones de gran importancia. Manifestaciones intersectoriales y huelgas generales se dieron en varios países de América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras), pero la temática alimentaria sólo aparecía de manera indirecta, incorporada en un amplio panel de diversas reivindicaciones. En otras partes, hubo movilizaciones sectoriales pidiendo una revalorización de salarios.

Es un hecho significativo, que en los lugares donde los gobiernos subieron al poder gracias a la movilización de amplios sectores populares, la sociedad civil y los movimientos sociales se mostraron más discretos, absteniéndose de movilizar masivamente por el tema de la crisis alimentaria. Una reserva que se explica esencialmente por las grandes esperanzas puestas en estos gobiernos. Así, según Marielle Palau, “el clima post-electoral y las esperanzas para con el nuevo gobierno contribuyeron a la moderación de las interpelaciones”. Es verdad que Fernando Lugo, recientemente electo, enfocó su campaña en los temas de la seguridad y de la soberanía alimentaria, en la participación del conjunto de los sectores sociales para la elaboración de políticas públicas, en la reforma agraria o también en el apoyo y el fortalecimiento de la agricultura familiar y de subsistencia, medidas reivindicadas desde hace mucho tiempo por los movimientos sociales paraguayos.

Asimismo, en Bolivia, en un contexto político extremadamente tenso y polarizado, los movimientos populares parecen haber privilegiado ampliamente los retos políticos del momento antes que las preocupaciones materiales inmediatas, aportando masivamente su apoyo al gobierno de Morales que atraviesa dificultades debido a la rebelión de los gobernadores del Este del país. Sólo los partidarios de éstos últimos trataron de aprovechar la situación para adherir la población a su causa... sin alcanzar su objetivo hasta ahora.

Pero los países latinoamericanos que sin duda estuvieron más protegidos de la crisis y de sus consecuencias sociales son aquellos en donde las políticas públicas establecidas por los gobiernos progresistas funcionaron plenamente, impidiendo que el alza de los precios golpee duramente a las poblaciones más expuestas. Por más limitado que sea, no hay duda alguna de que el programa “Bolsa Familia”, adoptado por el gobierno de Lula, que prevé el otorgamiento bajo ciertas condiciones de un ingreso complementario para las familias más pobres, permitió disminuir sustancialmente la factura de los alimentos¹¹. Alza de precios igualmente amortiguada en Venezuela donde una red muy densa de almacenes subsidiados y el otorgamiento de bonos alimentarios a los asalariados, financiados gracias a los ingresos petroleros, permiten ahora a las categorías sociales más pobres gozar del beneficio de una alimentación variada y barata.

En estos países extremadamente dependientes de las importaciones y que ya vivieron en el pasado disturbios (el famoso Caracazo en 1989), la cuestión de la soberanía alimentaria, de la reforma agraria y de la agricultura familiar y de subsistencia también está en el centro de la agenda política del gobierno. Pero el discurso oficial que convierte la “lucha contra los latifundios” en uno de sus caballos de batalla no debe ocultar una realidad netamente más prosaica, que resalta la dificultad de conciliar renta petrolera y autosuficiencia alimentaria.

El boom petrolero, combinado con una estricta política de control de cambios que trata de moderar la inflación y evitar la fuga de capitales, hace en efecto que las importaciones alimentarias sean relativamente baratas, con el riesgo de afectar la competitividad de los pequeños productores, de acrecentar el éxodo rural y de reforzar la dependencia alimentaria del país —éste importa en efecto cerca del 75% de los alimentos para su mercado doméstico—, esto a pesar de las tentativas del gobierno de Chávez para remediar esta situación con una política voluntarista de diversificación agrícola y económica.



En estos últimos cincuenta años, la producción alimentaria y agrícola mundial aumentó con la misma rapidez, e incluso más rápido, que el crecimiento demográfico.

En cuanto a la reforma agraria, su realización no estuvo exenta de errores y de extravíos. Así, como lo explica un agrónomo de la Universidad central de Venezuela, “se asignaron tierras y se distribuyeron recursos, pero en un clima de improvisación, sin comprender dimensiones técnicas de las decisiones, sin integrar la inversión económica a la necesidad del mercado” (citado por Saint-Upéry, 2007).

Dicho esto, sin juzgar de antemano su éxito o su fracaso a largo plazo, estas medidas demuestran sin embargo una verdadera voluntad de modificar radicalmente la orientación de las políticas agrícolas y alimentarias, al contrario de la mayoría de los países del Sur cuyas iniciativas no combaten las causas sino las consecuencias del problema: no hay proyectos de gran importancia, no hay reformas de envergadura, no hay iniciativas que lleven hacia un verdadero cambio estructural. Singularmente, la agricultura familiar y de subsistencia, eterno pariente pobre de las políticas públicas, se encontró nuevamente fuera del alcance de estas medidas enfocadas principalmente a las necesidades urbanas. Y el gobierno tailandés, por ejemplo, justifica el *statu quo* declarando sin discernimiento que el alza de los precios solo podía resultar positiva para el sector rural.

Desafío de la soberanía alimentaria

La cumbre de la FAO, celebrada en Roma en junio del 2008 a fin de encontrar soluciones comunes a la crisis alimentaria, fue sobre todo la

ocasión para los participantes de exponer sus profundas divergencias: divergencias de puntos de vista prácticamente inconciliables sobre los combustibles biológicos, sobre los subsidios y las ayudas agrícolas, sobre el tipo de política alimentaria que debe instituirse, etc. Además, las esperanzas puestas en esta cumbre dieron rápidamente paso a la desilusión.

A su favor, una serie de promesas de los Estados del Norte de aumentar su ayuda alimentaria de urgencia y su apoyo al desarrollo agrícola¹², varios llamados a una mayor responsabilidad por parte de los Estados en la gestión de sus políticas alimentaria y agrícola, una nueva preocupación en cuanto al futuro de la agricultura familiar y de subsistencia y, finalmente, una declaración intrascendente que, al mismo tiempo que allana los numerosos conflictos de intereses –económicos y políticos– entre los países, compromete a estos últimos a “eliminar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria para todos, hoy día y mañana”. Objetivo sin duda alguna audaz, pero que no hace más que retomar compromisos antiguos y varias veces reiterados desde entonces.

Adoptada por unanimidad por el conjunto de los Estados presentes – menos la abstención notoria de Venezuela, de Cuba y de Argentina –, la declaración es evasiva en la problemática sobre la ayuda de los países del Norte a su sector agrícola, se abstiene de cuestionar el modelo agro-exportador vigente y permanece callada ante el tema de la “soberanía alimentaria”. Luego de una letanía de buenas intenciones y de peticiones de principios, la orientación liberal de las políticas agrícolas mundiales se reafirma, en cambio, sin rodeos: “Alentamos a la comunidad internacional a continuar con sus esfuerzos en materia de liberalización de intercambios internacionales de productos agrícolas, reduciendo los obstáculos para el comercio y las políticas que son la causa de distorsiones de los mercados” (FAO, 2008).

Este unanimismo aparente no puede ocultar el hecho de que el consenso liberal que prevalecía en el sector agrícola en los años 1990 se res-

quebrajó. Consecuencia de la crisis, los reflejos proteccionistas se multiplicaron a pesar de las repetidas advertencias de las instituciones internacionales, dado que estas reacciones amenazan —es cierto— con agravar la situación de los países importadores. El fracaso de la reunión de la OMC, organizada un mes después de la Cumbre de la FAO y que se supone permitiría concluir el ciclo de Doha en lo referente a la liberalización, revela igualmente la ausencia de un verdadero consenso internacional. Seis meses antes, los acuerdos de cooperación económica (APE) propuestos por la Comisión europea a los países ACP para liberalizar los intercambios interregionales eran rechazados por varios países africanos, argumentando que representan una amenaza para su economía rural.

Propuesto algunos años antes por los Estados Unidos a los países de la región, el proyecto de integración económica del continente (Alca) corrió la misma suerte. Considerados como estrategias de remplazo del Alca, los acuerdos bilaterales de libre comercio tienen dificultad en imponerse o son cada vez más abiertamente cuestionados. No solamente por una población que se moviliza contra este tipo de acuerdo, sino también por los gobiernos de la ola izquierdista que se expandió en un continente escarmentado por cerca de treinta años de liberalismo desenfrenado. Iniciativa venezolana, el Alba (Alternativa bolivariana para las Américas) pretende desde ya imponerse, usando a gran escala una diplomacia de la seducción, como solución alterna a los acuerdos de libre comercio, especialmente promocionando una cooperación interestatal orientada hacia los temas de seguridad y de soberanía alimentaria¹³.

Sin embargo, falta mucho para ganar la apuesta alimentaria. La instauración de políticas audaces enfocadas en la protección, el apoyo y el fortalecimiento de la agricultura familiar y de subsistencia, la diversificación agrícola, el abastecimiento de los mercados internos (rurales y urbanos) con productos de calidad producidos localmente y a precios que aseguran la reproduc-

ción de las pequeñas explotaciones campesinas, dependerá ante todo de la capacidad de las organizaciones y movimientos sociales a superar sus numerosas divisiones, a converger hacia acciones comunes para imponer una verdadera relación de fuerza, y a encontrar finalmente soluciones políticas a sus reivindicaciones. Son muchos los obstáculos.

En el sector militante, en efecto, los intereses particulares y corporatistas subyugan a menudo la acción común y la coordinación necesaria. Como lo muestra en este libro Maristella Svampa en el caso de Argentina, en una coyuntura de precios altos provechosa para los sectores agrícolas nacionales, los proyectos gubernamentales encaminados a gravar las exportaciones desembocaron en un conflicto abierto con el mundo rural y generaron una “falsa polarización”. De esta manera, muchos pequeños y medianos productores, pero también amplios sectores urbanos, hartos por el aumento de los precios, se unieron al “frente agrario” dirigido esencialmente por una oligarquía agraria despreocupada del



Imaginería. Detalle



interés general. Una falsa polarización que también existe en Bolivia y en India, donde el tema de la vida cara es utilizado para fines políticos, incluso religiosos en el segundo caso.

Es verdad que la percepción diferenciada de los retos no facilita el proceso de convergencia, especialmente entre los movimientos sociales urbanos y rurales, los unos movilizando generalmente a favor del poder de compra y por el empleo, los otros reclamando precios de venta suficientemente altos para asegurarse un mejor ingreso. Contradictorios en apariencia, y a menudo factor de tensiones entre sindicatos y movimientos campesinos en las zonas de desarrollo económico, estos intereses sólo se conciliarán con la construcción de un marco común de percepción que establezca la relación entre los problemas particulares y los diferentes retos¹⁴.

Al permitir esa generalización, el concepto de “soberanía alimentaria”, que sintetiza los diferentes retos ligados a los temas agrícolas y alimentarios y define un proyecto alternativo a las políticas de liberalización, puede servir de base a tales convergencias, como lo muestra la experiencia exitosa de Vía Campesina.

Pero este proyecto sólo podrá llegar a un resultado si encuentra sólidos apoyos en las esferas políticas institucionales nacionales e internacionales, únicas capaces de transformar las reivindicaciones en políticas concretas. Ahora bien, aun ahí donde los dos universos, social y político, no están muy separados, ahí donde existe entre ellos un cierto “parecido de familia”, la presión de los grupos de interés, en este caso los de la agroindustria, se mantiene fuerte y continúa a influir en la definición de las políticas nacionales.

Esto sucede en Brasil. Aunque llegó al poder gracias a la movilización de numerosos sectores populares, el gobierno de Lula, motivado por intereses económicos a corto y a mediano plazo, poco se alejó de la política económica y agrícola ortodoxa de sus predecesores. A semejanza de otros países emergentes, el país hasta se volvió uno de los principales promotores de la liberalización de los intercambios agrícolas y –

con Estados Unidos – el gran defensor de los combustibles biológicos.

Lo que demuestra sobre todo el caso brasileño, es que el debate sobre los temas agrícolas y alimentarios no coincide para nada con las líneas del debate Norte-Sur. Es ante todo un debate entre dos modelos, dos visiones radicalmente diferentes sobre el devenir agrícola, que opone, como lo resumía con ironía un comentarista del Guardian: “Por un lado [...] gobiernos y grandes multinacionales que sostienen que necesitamos más mercado y globalización. Por otro [...], un número creciente de personas que piensan que hemos tocado fondo, y que sería mejor –en esas condiciones– dejar de cavar”.

Por una parte, los que, a la manera del primer ministro británico Gordon Brown, “hacen creer que el mejor medio de enfrentar la crisis alimentaria mundial es concluir lo más rápido el ciclo actual de negociación en la OMC para liberalizar más el comercio y abrir todavía más ampliamente los mercados mundiales a las exportaciones de las multinacionales”. Por otra, los que reclaman una reorientación radical de las políticas agrícolas para superar el caos que la globalización ayudó a crear, recordando de paso que las políticas de libre comercio desorganizaron la estructura de las sociedades rurales y “empujaron a millones de trabajadores rurales y urbanos hacia la economía informal, ahí donde el hambre es una realidad cotidiana incluso cuando todo va bien” (Hilary, 2008).

Bibliografía

- BELLO, W.: “How to manufacture a global food crisis: lessons from the World Bank, IMF, and WTO”, *Focus on Trade*, N°140, mayo, 2008.
- BRUNEL, S. : “Les émeutes de la faim, une opportunité historique pour les paysans”, *Le Mensuel de l'Université*, 2008. <www.lemensuel.net>
- CÁCERES, S.: “Ante la crisis alimentaria: ‘Ne-



- cesitamos más acciones y menos discursos”, *Envío*, N°315, junio, 2008.
- DELCOURT, L. : “Editorial: Explosion urbaine et mondialisation”, *Alternatives Sud*, vol. 14-2, 2007.
 - DE SCHUTTER, O. : “Il faut suspendre les programmes d’investissement dans les agro-carburants”, *Le Soir*, 6-7 de septiembre de 2008.
 - *Etats des résistances dans le Sud – 2008 (2007)*, CETRIS/Syllepse, Louvain-la-Neuve/Paris.
 - FAO: *Declaración de la Conferencia de alto nivel sobre la seguridad alimentaria mundial: los desafíos del cambio climático y la bioenergía*, 5 de junio, 2008. <www.fao.org>.
 - FRIEDMAN, H.: “The origins of Third World food dependence”, *Third World Resurgence*, N°212. Versión tomada del libro, *The Food Question: Profits Versus People*, (1990), Bernstein Henry, Crow Ben, Mackintosh Maureen, Martin Charlotte (ed.), New York, Monthly Review Press, 2008.
 - HARSCH, E.: “Manifestations contre la vie chère. Emeutes et répression témoignent des problèmes de gouvernance en Afrique”, *Afrique Renouveau*, vol. 22 – 2 de julio, 2008.
 - HILARY, J.: “Food crisis: stop digging!”, *The Guardian*, 4 de junio, 2008.
 - HUSSON, S. : “Crise alimentaire. Soigner le mal par les racines”, *Faim et Développement magazine*, N°232, junio-julio, 2008.
 - LEMAITRE, F. : “Une crise alimentaire majeure se profile”, *Le Monde*, 9 de febrero, 2008.
 - LE SAOUT, D. : “Les émeutes en perspective”, in Didier Le Saout, Marguerite Rollin de (dir.), *Emeutes et mouvements sociaux au Maghreb. Perspective comparée*, Paris, Karthala/Institut Maghreb-Europe, 1999.
 - MAZOYER, M. : “L’origine de la crise alimentaire mondiale”, Entrevista, 2008. <www.cite-sciences.fr>.
 - MAZOYER, M. y L. Roudart : *Histoire des agricultures dans le monde. Du néolithique à la crise contemporaine*, Paris, Le Seuil, col. Point Histoire, s.l., 2002.
 - MCKIE, R. y H. Steward: “Riots, The food crisis bits”, *The Observer*, 13 de abril, 2008.
 - DE RAVIGNAN, A. : “Au Sud, plus dur est le choc”, *Alternatives économiques*, N°269, mayo, 2008.
 - RIVELLI, Ph. : “Les Philippins regretteraient presque... Ferdinand Marcos”, *Le Monde Diplomatique*, N°651, junio, 2008.
 - SAINT-UPERY, M. : *Le rêve de Bolívar. Le défi des gauches sud-américaines*, Paris, La Découverte, 2007.
 - WEAVER, M.: “Q&A, Food crisis”, *The Guardian*, 29 de abril, 2008.

1 Artículo traducido de *Alternatives Sud*, N° 4 (2008)

2 Desde julio del 2007, la FAO propuso, sin éxito, la organización de una Conferencia de alto nivel sobre la seguridad alimentaria y, en diciembre del mismo año, previendo la inminencia y la naturaleza de la crisis – especialmente una multiplicación de motines del hambre –, lanzó una iniciativa, tampoco muy tomada en cuenta, contra el alza desmesurada de los precios de los alimentos y a favor del aumento de la producción agrícola mundial.

3 Varios especialistas estiman que el 75% del aumento de los precios desde el 2006 se debe a la producción de combustibles biológicos, teniendo en cuenta las políticas (programas de inversión, subsidios, etc.) y los efectos especulativos asociados (De Schutter, 2008).

4 Según Marcel Mazoyer (economista e ingeniero agrónomo, profesor emérito del Instituto nacional agrónomo Paris-Grignon, presidente del comité del programa de la FAO de 1983 a 1993), habrían suficientes tierras explotables para alimentar sosteniblemente a toda la población incluso hasta el 2050, cuando ésta haya alcanzado su apogeo demográfico, inclusive sin tomar en cuenta bosques y tierras reservadas para otros cultivos (combustibles biológicos, por ejemplo). Pero el autor aclara, sin embargo, que este obje-



- tivo solo podrá ser alcanzado si se aceptan inversiones substanciales en el sector de los cultivos de subsistencia a fin de mejorar la productividad (Mazoyer, 2008).
- 5 Se trataba esencialmente de excedentes de producción donados por Estados Unidos como ayuda alimentaria o vendidos a precios concesionales. En el periodo de la Guerra fría, esa ayuda tenía un objetivo estratégico, tanto los Estados Unidos como la URSS utilizaron el instrumento de la ayuda alimentaria para fortalecer alianzas.
 - 6 Según Marcel Mazoyer, de los 852 millones de personas que sufren hambre en el mundo, las tres cuartas partes son rurales. Los campesinos representan aproximadamente dos tercios de los 3 mil millones de personas que viven con menos de 2 dólares por día (2008).
 - 7 En Burkina Faso, la coalición lleva el nombre de “Coalición nacional de lucha contra la vida cara, la corrupción, el fraude, la impunidad y por las libertades”. En mayo del 2008, se realizó una huelga general de 72 horas por iniciativa de ella.
 - 8 En ciertas regiones, estos últimos no dudan además en utilizar la intimidación, incluso el asesinato de militantes para conseguir sus fines. En Filipinas, opuesto al North Luzon Super Economic Planship (vasto plan de desarrollo económico elaborado por las autoridades locales que prevé la construcción de un puerto al norte de la isla de Luzón, la creación de zonas francas y el desarrollo de los cultivos de exportación), el movimiento campesino regional Kagimungan vio precisamente a varios de sus líderes asesinados por grupos paramilitares. Considerada como el principal obstáculo para la realización del plan, esta organización había impulsado la lucha contra la aparcería en la región y obtuvo algunas victorias decisivas (Cancelación del pago de 50% de las cosechas a los “señores de la tierra” e imposición a los comerciantes de condiciones de compra de las cosechas más favorables para los pequeños productores) (Rivelli, 2008).
 - 9 Movimiento de campesinos sin tierra, Movimientos de las víctimas de las presas, Comisión pastoral de la tierra.
 - 10 Esta plataforma agrupa las cuatro grandes redes subregionales africanas: Redes de las organizaciones campesinas de Africa austral (Saca), de Africa central (Propac), de Africa del Este (Eaff) y del Oeste (Roppa).
 - 11 Actualmente el programa abarca más o menos 11 millones de familias, o sea aproximadamente el cuarto de la población brasileña.
 - 12 Cabe indicar que el monto total de las ayudas para el desarrollo de la agricultura no ha dejado de disminuir desde fines de los años 1970, pasando de más de 7 mil millones de dólares a menos de 2 mil millones en el 2005. En el mismo periodo, la proporción de esta ayuda con respecto a la totalidad de ayudas públicas pasó de más del 16% a menos del 4% (de Ravignan, 2008).
 - 13 El Alba fue oficialmente celebrado en abril del 2005 con la firma de un tratado “comercial de los pueblos” entre Venezuela y Cuba. Posteriormente, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana y Honduras se unieron a esta iniciativa.
 - 14 Se pudo ver en varios países convergencias inéditas: en México, por ejemplo, durante la crisis de la tortilla, los sindicatos campesinos se aliaron a los sindicatos obreros para organizar las movilizaciones; en varios países de África donde ciertas organizaciones rurales integraron las coaliciones contra la vida cara, o también en Egipto donde los campesinos movilizados contra un proyecto de desarrollo económico en la ciudad de Maniet recibieron el apoyo importante por parte de las poblaciones urbanas.

